ES

Foro Internacional de Compra Pública Alimentaria y Agricultura Campesina y Familiar

PONENCIA POLÍTICA: Compra pública alimentaria como palanca para garantizar los derechos del campesinado y fortalecer la agricultura familiar y campesina

FR

Forum international sur les Achats Publics Alimentaires et l'Agriculture Paysanne et Familiale

DÉCLARATION POLITIQUE: Les achats publics alimentaires comme levier pour garantir les droits des paysans et renforcer l'agriculture familiale et paysanne

EN

International Forum on Public Food Procurement and Peasant and Family Farming

POLICY PAPER: Public food procurement as a lever to guarantee the rights of peasants and strengthen family and peasant farming

PT

Fórum Internacional sobre Contratação Pública Alimentar e Agricultura Camponesa e Familiar

DECLARAÇÃO POLÍTICA: A aquisição pública de alimentos como alavanca para garantir os direitos dos camponeses e fortalecer a agricultura familiar e camponesa

PONENCIA POLÍTICA

Compra pública alimentaria como palanca para garantizar los derechos del campesinado y fortalecer la agricultura familiar y campesina

1. Introducción

Vivimos un momento crítico para los sistemas alimentarios globales. La crisis climática, la pérdida acelerada de biodiversidad y suelos, la liberalización comercial y la especulación y desregulación de la economía de mercado, la concentración corporativa de la cadena agroalimentaria o el incremento de desigualdades rurales están poniendo en riesgo el derecho a la alimentación y la sostenibilidad de los territorios. Paralelamente, los modelos de restauración colectiva y provisión alimentaria de servicios públicos han sido progresivamente externalizados y mercantilizados, desplazando a la agricultura familiar y reduciendo la capacidad de todas las personas para acceder a servicios alimentarios sanos, sostenibles y justos.

En este contexto, es fundamental priorizar políticas públicas que apoyen la agricultura familiar y campesina[1]. Estas políticas reconocen la agricultura familiar —campesina, indígena y de pequeña y mediana escala— como un motor estratégico de desarrollo, implementando medidas para garantizar su viabilidad económica, su papel en la gestión del territorio y su contribución a la soberanía alimentaria. Incluyen instrumentos como el acceso a mercados locales, la Compra Pública Alimentaria (CPA), la regulación de mercados para precios justos y estables para las y los agricultores, incentivos a la agroecología, mejoras en la infraestructura rural y la garantía de los derechos reconocidos por la UNDROP (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales). Su objetivo es fortalecer las redes locales de producción, democratizar la producción de alimentos y el acceso a ellos, y sostener modelos agrícolas social y ambientalmente justos.

Por otro lado, los acuerdos de liberalización comercial, como el acuerdo **MERCOSUR-UE**, ponen en riesgo la capacidad de los Estados para desarrollar políticas alimentarias

(1) En este texto nos referiremos a la agricultura campesina y familiar. Nuestro entendimiento de la agricultura campesina y familiar se basa en la definición del artículo 1 de la UNDROP.

basadas en derechos. La entrada masiva de productos importados a bajo coste, que desalienta la producción local y genera una competencia injusta, puede debilitar la agricultura campesina y familiar y dificultar la implementación de la compra pública basada en criterios de sostenibilidad social y ambiental,o de proximidad. En este contexto, fortalecer la agricultura comunitaria (CBA, por sus siglas en inglés) como herramienta estratégica se vuelve aún más urgente para proteger la transición hacia sistemas alimentarios territoriales frente a dinámicas comerciales que exacerban la desigualdad y la dependencia y sustituyen los modelos de agricultura campesina por una agricultura industrial orientada a la exportación.

Frente a todos estos desafíos, la agricultura campesina y familiar —campesina, indígena y de pequeña escala— debe ser apoyada como modelo clave para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, generar empleo digno, mantener vivos los territorios rurales, proteger la biodiversidad y sostener prácticas agroecológicas adaptadas al territorio. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP) establece un marco claro y ambicioso que reconoce estos derechos y exige a los Estados protegerlos frente a prácticas abusivas, fortalecer su acceso a los mercados locales y garantizar medios de vida dignos.

En este contexto, la compra pública alimentaria no es solo un procedimiento administrativo, sino una herramienta poderosa de política pública. Permite transformar los sistemas alimentarios, garantizar una remuneración justa para las agricultoras y agricultores, y redirigir la inversión pública hacia modelos más éticos y sostenibles. Estos modelos ponen en el centro la sostenibilidad de la producción y distribución, la protección de los derechos reconocidos por la UNDROP, la salud comunitaria mediante alimentos cultural y nutricionalmente adecuados, y fomentan además las cadenas cortas de suministro.

Asimismo, la Compra Pública Alimentaria debe entenderse como una política estructural de salud pública integral. No solo condiciona la calidad nutricional de la población, sino que incide directamente en las condiciones de trabajo en el campo, en la exposición a pesticidas y sustancias peligrosas, y en la salud de las comunidades rurales. Orientar la inversión pública hacia modelos agroecológicos y de pequeña escala constituye también una medida preventiva frente a enfermedades asociadas a la malnutrición, a la precariedad laboral y a la exposición crónica a químicos agrícolas. No es coherente financiar con dinero público alimentos producidos bajo condiciones que generan enfermedad, explotación o degradación ambiental.

Existen **buenas prácticas internacionales** que demuestran que este enfoque no solo es viable, sino que genera beneficios tangibles.

En la **India**, por ejemplo, el sistema de **Precio Mínimo de Apoyo (MSP)** ofrece precios garantizados a la **pequeña agricultura campesina** para cultivos alimentarios clave. Estas compras públicas se utilizan para abastecer dos grandes programas de distribución de alimentos: el **Programa de Comidas del Mediodía**, que proporciona comidas escolares gratuitas a más de 100 millones de niñas y niños, y el **Sistema de Distribución Pública (PDS)**, que ofrece alimentos subvencionados a hogares con bajos ingresos. En conjunto, estos programas contribuyen a garantizar la estabilidad de los mercados para quienes producen alimentos y, al mismo tiempo, aseguran el acceso a alimentos nutritivos para millones de personas. Esta experiencia resulta especialmente relevante para Europa, donde **muchas personas productoras de pequeña escala** se enfrentan a la exclusión de los procesos de contratación pública debido a la excesiva centralización de las compras, la falta de garantías de precios y las cargas administrativas que dificultan su participación.

Brasil presenta un modelo más integrado, en el que la contratación pública está incorporada en marcos de políticas nacionales para la seguridad alimentaria y nutricional, el desarrollo rural y la agroecología. Dos programas emblemáticos ejemplifican este enfoque: (1) **El Programa Nacional de Alimentación Escolar** (PNAE), que atiende a más de 40 millones de niños, exige que al menos el 30 % de los alimentos escolares se adquieran a pequeños agricultores familiares, con primas adicionales para productos orgánicos y agroecológicos. (2) El **Programa de Adquisición de Alimentos** (PAA), que permite la compra directamente a agricultores familiares, incluidos aquellos de grupos marginados. Ofrece procesos de licitación simplificados, fortalecimiento de capacidades, seguros y apoyo en infraestructura, y prioriza la biodiversidad, las variedades alimentarias tradicionales y los métodos agroecológicos. En conjunto, estos programas canalizan más de 600 millones de dólares estadounidenses al año hacia las economías alimentarias locales. Cabe destacar que Brasil también financia infraestructuras alimentarias públicas (como cocinas comunitarias y bancos de alimentos) que se abastecen de productos locales y de temporada procedentes de pequeños agricultores, reforzando aún más el sistema alimentario territorial.

Estos ejemplos globales muestran que la contratación pública de alimentos no es simplemente una herramienta de compra ecológica, sino un instrumento estratégico para la justicia, la equidad y la resiliencia.

El **Foro Internacional de Compra Pública Alimentaria** (Valencia 2026) se convoca con el objetivo de avanzar colectivamente hacia este horizonte y demostrar, con evidencia, alianzas y propuestas políticas, que **sí es posible** transformar los sistemas alimentarios desde la compra pública.

2. Mandato y legitimidad del Comité Organizador

El comité organizador reúne una alianza entre movimientos campesinos, organizaciones de la sociedad civil, actores institucionales y universidades:

- **COAG, Sindicato Labrego Galego, ENHE Bizkaia**, representantes del campesinado en el Estado español.
- **Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC – La Vía Campesina),** como movimiento campesino internacional que defiende la soberanía alimentaria y la implementación de la UNDROP.
- **CERAI, Mundubat, Justicia Alimentaria, Entretantos, Mensa Cívica, Menjadors Ecològics, Consorcio Giasat y Amigas de la Tierra**, organizaciones comprometidas con la soberanía alimentaria.
- **Diversas universidades** (Universitat Politècnica de València, Universitat de València, ISEC (Universidad de Córdoba) y centros de investigación, como el Grupo de Compra Pública Verde de la Universidad de Alcalà de Henares, que aportan evidencia científica sólida en agroecología, políticas públicas y sistemas alimentarios sostenibles.
- **Redes internacionales de ciudades (Red de Municipios por la Agroecología)**

Esta convergencia aporta una legitimidad política, social e institucional que permite situar la CPA en el centro de las agendas globales hacia la transformación de los sistemas alimentarios y la garantía de derechos.

3. Diagnóstico político del sistema alimentario actual

3.1. Concentración corporativa y pérdida de control público

Las grandes corporaciones controlan segmentos crecientes de la producción, el procesamiento, la distribución y la restauración institucional. Este modelo:

- Limita la diversidad e inhibe el desarrollo de economías justas.
- Se sustenta sobre múltiples desigualdades tanto en la producción como en el acceso al alimento (género, clase, raza...).
- Impone precios injustos a pequeñas producciones.
- Debilita los servicios públicos de alimentación.

- Obstaculiza la transición hacia la sostenibilidad y la agroecología.
- Dificulta la transición ecológica.
- Impide el relevo generacional de la agricultura familiar y campesina.

La externalización generalizada de las cocinas escolares, de hospitales y residencias ha reducido la capacidad del Estado de orientar la alimentación hacia objetivos de salud, sostenibilidad y equidad.

3.2. Debilitamiento estructural de la agricultura familiar

En la mayoría de los territorios, las explotaciones familiares y campesinas sufren:

- Precios bajos, a menudo por debajo de los costes de producción, en mercados volátiles e injustos.
- Políticas que favorecen la agricultura industrial, integrada y de gran escala.
- Barreras para acceder a mercados territoriales estables.
- Pagos públicos y políticas que favorecen la agricultura industrial, integrada y a gran escala.
- Condiciones de competencia desiguales frente a cadenas globales.
- Ausencia de infraestructura pública de apoyo.
- Falta de relevo generacional
- Precariedad del trabajo agrícola.
- Dificultad de acceso a la tierra.
- Falta de infraestructura pública de apoyo.
- División sexual del trabajo en el que se infravalora y se invisibiliza el trabajo realizado por las mujeres, tanto en lo productivo como en las tareas de cuidados que sostienen la reproducción de la vida.

El resultado es un acelerado declive de la agricultura familiar, con importantes consecuencias económicas, sociales y ambientales.

3.3. Incumplimiento de los derechos campesinos reconocidos en la UNDROP

Aunque la UNDROP reconoce derechos esenciales (acceso a mercados locales, tierra,

semillas, participación política), su implementación sigue siendo débil. La falta de mecanismos de rendición de cuentas y de políticas públicas concretas impide que estos derechos se hagan efectivos.

3.4. Potencial no aprovechado de la Compra Pública Alimentaria

La CPA podría movilizar volúmenes significativos de inversión pública, pero su diseño actual:

- Prioriza criterios economicistas frente a criterios de desarrollo territorial.
- Está diseñada para grandes empresas capaces de asumir las solvencias exigidas.
- Desincentiva la participación de pequeños productores y el acceso de sus productos a este canal comercial, dificultando la implementación del Art. 10 de la UNDROP.
- Ignora los impactos sobre el desarrollo rural, la salud y los derechos humanos.
- No genera entornos favorables para los sistemas alimentarios territoriales.
- Carece de perspectiva de derechos, desde el derecho a la alimentación y nutrición adecuadas hasta los derechos del campesinado.
- Prioriza una competencia excesiva basada únicamente en el precio.
- Existe además el riesgo de que, sin reformas estructurales, la CPA sea capturada por grandes operadores económicos mediante procesos de agregación artificial de la oferta, certificaciones privadas excluyentes o cadenas de suministro que reproducen la concentración del mercado bajo una apariencia de sostenibilidad. Sin mecanismos claros de priorización de la agricultura familiar y sin límites efectivos a la concentración, la compra pública puede convertirse en un nuevo nicho de mercado para las mismas estructuras corporativas que han contribuido a debilitar los sistemas alimentarios territoriales.

Este potencial necesita ser desbloqueado mediante cambios regulatorios, institucionales y políticos.

4. Marco político y normativo desde el que partimos

El comité organizador posiciona la CPA como una herramienta estratégica dentro de un

marco de instrumentos internacionales que regulan derechos y obligaciones establecidos por los siguientes documentos internacionales:

- **Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH, 1948):** Establece en su artículo 25 el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, con especial énfasis en la alimentación.
- **Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC):** Consagra el derecho a una alimentación adecuada, obligando a los Estados a garantizar el acceso físico y económico a alimentos culturalmente apropiados, producidos de manera sostenible.
- **UNDROP (Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos, 2018):** Especialmente sus artículos sobre acceso a mercados locales, participación de los campesinos en políticas públicas, uso sostenible de los recursos naturales y protección frente a prácticas comerciales abusivas.
- **Recomendación General Núm. 34 de la CEDAW (2016):** Emitida por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), este documento desarrolla de forma holística los derechos de las mujeres rurales, reconociendo su rol crucial en la seguridad alimentaria y exigiendo salvaguardar su derecho a una alimentación y nutrición adecuadas.
- **Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (FAO-IFAD).**
- **Directrices Voluntarias sobre Sistemas Alimentarios y Nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria.**
- **Directrices Voluntarias sobre Gobernanza Responsable de la tenencia de la Tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.**
- **Directrices Voluntarias para la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas.**
- **Agenda 2030 y ODS**, con especial atención a los ODS 2, 12, 13, 15 y 17.
- **Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)**: Especialmente sobre libertad sindical, salarios dignos y condiciones laborales justas en la cadena agroalimentaria.
- **Marcos regionales y nacionales** que reconocen a la agricultura familiar como actor estratégico.

Desde este marco entendemos que la Compra Pública Alimentaria Sostenible no es opcional, sino una obligación derivada del compromiso con los derechos humanos, la sostenibilidad y la justicia social.

5. Principios políticos que guían este posicionamiento

1. Centralidad de la agricultura familiar, campesina, de pequeña escala e indígena como proveedor estratégico para la CPA.
2. Remuneración justa para los productores. Los agricultores no son meros receptores de precios; estos deben situarse por encima de los costes de producción y fijarse con la participación de organizaciones campesinas.
3. Primacía de los derechos humanos, incluidos el derecho a la alimentación adecuada y los derechos de los campesinos, en el diseño de las políticas alimentarias.
4. Proximidad y territorialización de los sistemas alimentarios, fortaleciendo los circuitos cortos y los mercados locales.
5. Soberanía alimentaria como horizonte político para democratizar la alimentación.
6. Agroecología como enfoque integral en producción, transformación, distribución y consumo.
7. Recuperación de la gestión pública de los servicios alimentarios, priorizando cocinas in situ, personal público y modelos de provisión público-comunitarios.
8. Participación efectiva y vinculante de las organizaciones campesinas y de la sociedad civil en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas de CPA.
9. Equidad e interseccionalidad: género, juventud rural, migración, pueblos indígenas.
10. Justicia climática, con especial atención a la resiliencia de los sistemas alimentarios.
11. Transparencia y rendición de cuentas, tanto para las administraciones como para los operadores económicos.
12. Salud integral del sistema alimentario.
13. La CPA debe proteger simultáneamente la salud de la población consumidora,

de las personas trabajadoras agrícolas y de las comunidades rurales. Esto implica reducir la exposición a pesticidas y sustancias peligrosas, garantizar condiciones laborales seguras y dignas en toda la cadena agroalimentaria y promover modelos productivos que prioricen la vida y el bienestar por encima de la rentabilidad a corto plazo.

6. Propuestas políticas para transformar la Compra Pública Alimentaria

6.1. Recuperar el control público de la alimentación

- Desarrollo de **regulación y políticas públicas** que permitan el desarrollo del derecho a la alimentación adecuada para toda la población en el marco de un sistema alimentario que posibilite la transformación agroecológica.
- Fomentar la **gestión pública directa** de comedores escolares, hospitales y residencias.
- Establecer **lotes diferenciados de gestión y suministro**, donde la gestión (cocina, personal) retorne al ámbito público y el suministro pueda organizarse en torno a productores locales.
- Crear **infraestructura pública agroalimentaria**: centros logísticos, obradores, cocinas centrales públicas, espacios de acopio.
- Garantizar los derechos de las profesionales que trabajan en las cocinas, incluyendo condiciones laborales dignas, salarios justos, horarios razonables, formación continua y medios adecuados para desarrollar sus funciones de manera segura y eficiente.

6.2. Adecuación normativa para facilitar la participación de la agricultura familiar

- Definir legalmente el estatus de la agricultura familiar y campesina como proveedor prioritario en la contratación pública alimentaria, con el fin de corregir los desequilibrios estructurales del mercado y fortalecer la resiliencia del sistema alimentario. Adaptar los procesos de contratación para permitir la entrada de pequeñas explotaciones: lotes pequeños, contratos reservados, criterios sociales y ambientales.
- Reducir las barreras burocráticas y las cargas administrativas, estableciendo estándares mínimos de contratación que garanticen la inclusión de agricultores de pequeña escala, y que incluyan definiciones claras y umbrales mínimos de participación.

- Adoptar modelos de contratación dinámicos y descentralizados que permitan flexibilidad y capacidad de respuesta a las economías alimentarias locales y a las condiciones ambientales.
- Desarrollar modelos de pliegos de prescripciones técnicas que integren criterios de agroecología, proximidad y estacionalidad de los alimentos con una sólida justificación jurídica.
- La adecuación normativa deberá incorporar mecanismos específicos de equidad de género y relevo generacional, incluyendo la posibilidad de establecer contratos reservados o criterios de priorización para explotaciones lideradas por mujeres y jóvenes rurales. Asimismo, deberán desarrollarse indicadores obligatorios de impacto social y de género en la planificación y evaluación de la CPA.

6.3. Incorporación obligatoria de derechos humanos y el principio de indivisibilidad de derechos en la CPA

- Incluir **evaluaciones de impacto en derechos campesinos** en los contratos públicos de alimentación.
- Incorporar el derecho a la alimentación y nutrición adecuada como pilar
- Integrar la UNDROP como marco orientador en todas las fases de planificación, contratación y ejecución.
- Garantizar que los criterios de adjudicación, condiciones especiales de ejecución y especificaciones técnicas priorizan sostenibilidad, equidad y participación campesina, canales cortos de comercialización, temporada, remuneración justa, producción agroecológica.
- Alinear la contratación pública con los principios de **Seguridad Social Alimentaria**, reconociendo la alimentación como un derecho universal, apoyando elecciones alimentarias definidas de manera democrática y financiando el acceso a través de fondos públicos y contribuciones sociales; asegurando así una **remuneración justa para las personas agricultoras** y un **acceso digno a alimentos saludables y culturalmente apropiados para toda la población**.
- Aplicar una **fuerte condicionalidad social**, adjudicando contratos únicamente a proveedores que respeten los derechos laborales y fomenten el diálogo social.
- Implementar otros mecanismos habituales en los procesos de compra pública alimentaria en diferentes países que garanticen la aplicación de los principios y la incorporación de los derechos humanos, como la reserva de contratos para la

agricultura de pequeña escala o la estructuración de lotes que facilite su participación efectiva.

- Incorporar evaluaciones de impacto en salud laboral y ambiental en los contratos públicos de alimentación. La CPA debe excluir proveedores vinculados a vulneraciones de derechos laborales, explotación de personas trabajadoras agrícolas o uso intensivo de sustancias peligrosas que generen riesgos para la salud humana y ambiental. La contratación pública debe actuar como palanca para reducir la exposición a pesticidas y garantizar condiciones laborales dignas, en coherencia con los convenios de la OIT y el principio de no regresión en derechos humanos.

6.4. Territorialización de los sistemas de abastecimiento público

- Diseñar planes territoriales de abastecimiento basados en la agricultura familiar.
- Promover la implementación de mecanismos que garanticen la aplicación de los principios de compra pública alimentaria y la incorporación de los derechos humanos, como la reserva de contratos para la agricultura de pequeña escala o la estructuración de lotes que facilite su participación efectiva. Esto puede incluir la creación de consorcios territoriales que vinculen administraciones, productoras y productores, y entidades sociales, así como otras formas de coordinación que articulen oferta y demanda de manera participada, con apoyo de otras entidades cuando sea necesario, para profundizar e incrementar la escala. Entre estos mecanismos se encuentran plataformas colectivas de comercialización, sistemas de planificación de compras participadas, mesas territoriales de compra pública alimentaria o modelos de contrato flexibles, entre otros.
- Invertir en infraestructuras de transporte sostenible, frío, transformación y almacenamiento.
- Apoyar **sistemas alimentarios territoriales** basados en la **agroecología, la biodiversidad y las culturas alimentarias**, mediante **cadenas cortas de suministro**.

6.5. Fortalecimiento de la gobernanza democrática

- Crear Consejos Alimentarios Públicos con participación campesina vinculante.
- Garantizar mecanismos de seguimiento y evaluación independientes.
- Fomentar la transparencia y trazabilidad en toda la cadena de suministro.

- Garantizar una **gobernanza multinivel** con la participación de **organizaciones de agricultores, municipios y sociedad civil**.

6.6. Promoción de dietas saludables, sostenibles y culturalmente apropiadas

- Diseñar menús que incorporen alimentos de temporada, productos locales y recetas tradicionales que reflejen la diversidad cultural de los territorios.
- Reducir el consumo de proteína animal de origen industrial, promoviendo proteínas vegetales y legumbres producidas localmente.
- Implementar programas de educación alimentaria en escuelas y centros públicos que conecten la alimentación con la salud, la cultura y el territorio.
- Establecer estándares nutricionales que prioricen alimentos frescos, mínimamente procesados y libres de aditivos innecesarios.
- Los comedores escolares y otros servicios públicos de alimentación deben concebirse también como espacios pedagógicos y democráticos que conecten el territorio con el aula. La CPA en centros educativos no es únicamente un mecanismo de provisión alimentaria, sino una herramienta de educación alimentaria transformadora que fortalece el vínculo campo-ciudad, promueve culturas alimentarias locales y fomenta una ciudadanía crítica y consciente.

6.7. Garantizar una remuneración justa para los productores

- Garantizar **precios justos y mercados estables** para los agricultores de pequeña y mediana escala, incluyendo mecanismos que permitan a los agricultores pasar de ser meros **tomadores de precios a definidores de precios**.
- Desarrollar **mecanismos de compra pública** que prioricen la **estabilidad de ingresos** de los agricultores mediante contratos a largo plazo, pagos puntuales y esquemas de compensación que reflejen el **verdadero coste de una producción sostenible**, utilizando la compra pública como **herramienta estratégica** para apoyar la **regulación justa y transparente del mercado** mediante la promoción de cadenas de suministro locales y regionales, la prevención del **dumping de precios** y la desincentivación de la **concentración del mercado** — fomentando así **sistemas alimentarios diversos y resilientes**, que empoderen a los productores de pequeña escala y reduzcan la dependencia de **mercados globales volátiles**.

7. Llamamiento político a gobiernos e instituciones internacionales

Instamos a:

- **Municipios, regiones, Estados y otras entidades del sector público**, incluyendo universidades, fundaciones públicas y organismos similares, a adoptar políticas de Compra Pública Alimentaria alineadas con la agricultura familiar, la agroecología, el Derecho a la alimentación y nutrición adecuada y los principios de la UNDROP. Estas políticas deben promover prácticas que faciliten la participación de productoras y productores de pequeña escala, garanticen la incorporación de los derechos humanos y fortalezcan la sostenibilidad territorial, social y ambiental.
- La **Unión Europea y otros organismos regionales** a desarrollar reglamentos que reconozcan a la CPA como herramienta de derechos humanos.
- Los **organismos multilaterales** a impulsar la transición hacia sistemas alimentarios territorializados.
- Los **movimientos sociales, organizaciones de cooperación y universidades** a fortalecer las alianzas que permitan llevar este marco a la práctica.
- Instamos asimismo a **garantizar la coherencia** entre las políticas de compra pública alimentaria y los marcos comerciales, agrarios y fiscales. No es posible fortalecer la agricultura familiar mediante la CPA mientras se consolidan acuerdos comerciales o políticas agrarias que favorecen la concentración corporativa y la competencia desleal. La CPA debe integrarse en una estrategia más amplia de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y la garantía efectiva de derechos humanos.

El momento histórico exige ambición. La compra pública alimentaria es una herramienta transformadora que debe situarse en el centro de las políticas alimentarias del siglo XXI.

8. Camino hacia el Foro Internacional de Compra Pública Alimentaria

Esta ponencia constituye un **documento de base** que orientará el proceso preparatorio del Foro Internacional de CPA en Valencia 2026. Servirá como marco de referencia para los debates, las mesas técnicas, las propuestas normativas y la declaración final del Foro.

Nuestro objetivo es construir, junto a gobiernos, campesinado, instituciones, academia y sociedad civil, un marco global que garantice sistemas alimentarios justos, sostenibles y basados en derechos humanos, con la agricultura familiar y campesina en el centro.

El Foro será un espacio de confluencia entre:

- **Experiencias inspiradoras** de compra pública alimentaria desde diferentes regiones del mundo.
- **Propuestas normativas** concretas adaptadas a diferentes contextos legales y territoriales.
- **Evidencia científica** que sustente la viabilidad técnica, económica y social de este modelo.
- **Alianzas estratégicas** entre actores institucionales, movimientos sociales y academia que permitan escalar las transformaciones.

La convocatoria del Foro Internacional en València 2026 es una apuesta por demostrar que otro sistema alimentario es posible, necesario y urgente. Un sistema que coloque a las personas y al planeta en el centro, que garantice derechos y que construya justicia alimentaria desde los territorios.

DÉCLARATION POLITIQUE

Les achats publics alimentaires comme levier pour garantir les droits des paysans et renforcer l'agriculture familiale et paysanne

1. Introduction

Nous vivons un moment critique pour les systèmes alimentaires mondiaux. La crise climatique, la perte accélérée de biodiversité et de sols, la libéralisation commerciale, la spéculation et la déréglementation de l'économie de marché, la concentration des entreprises dans la chaîne agroalimentaire ou l'aggravation des inégalités rurales mettent en péril le droit à l'alimentation et la durabilité des territoires. Parallèlement, les modèles de restauration collective et d'approvisionnement alimentaire des services publics ont été progressivement externalisés et marchandisés, déplaçant l'agriculture familiale et réduisant la capacité de chacun à accéder à des services alimentaires sains, durables et équitables.

Dans ce contexte, il est fondamental de donner la priorité aux politiques publiques qui soutiennent l'agriculture familiale et paysanne[1]. Ces politiques reconnaissent l'agriculture familiale — paysanne, autochtone et à petite et moyenne échelle — comme un moteur stratégique du développement, en mettant en œuvre des mesures visant à garantir sa viabilité économique, son rôle dans la gestion du territoire et sa contribution à la souveraineté alimentaire. Elles comprennent des instruments tels que l'accès aux marchés locaux, les achats publics de produits alimentaires (APA), la régulation des marchés pour des prix justes et stables pour les agriculteurs et agricultrices, des incitations à l'agroécologie, l'amélioration des infrastructures rurales et la garantie des droits reconnus par l'UNDROP (Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales). Son objectif est de renforcer les réseaux locaux de production, de démocratiser la production alimentaire et l'accès à la nourriture, et de soutenir des modèles agricoles socialement et écologiquement équitables.

(1) Dans ce texte, nous aborderons l'agriculture paysanne et familiale. Notre conception de l'agriculture paysanne et familiale repose sur la définition donnée à l'article 1 de l'UNDROP.

D'autre part, les accords de libéralisation commerciale, tels que l'accord **MERCOSUR-UE**, mettent en péril la capacité des États à développer des politiques alimentaires fondées sur les droits. L'afflux massif de produits importés à bas prix, qui décourage la production locale et engendre une concurrence déloyale, peut affaiblir l'agriculture paysanne et familiale et entraver la mise en œuvre de l'approvisionnement public fondé sur des critères de durabilité sociale et environnementale, ou de proximité. Dans ce contexte, le renforcement de l'agriculture communautaire (CBA, selon son acronyme anglais) en tant qu'outil stratégique devient encore plus urgent pour protéger la transition vers des systèmes alimentaires territoriaux face à des dynamiques commerciales qui exacerbent les inégalités et la dépendance et remplacent les modèles d'agriculture paysanne par une agriculture industrielle orientée vers l'exportation.

Face à tous ces défis, l'agriculture paysanne et familiale — paysanne, autochtone et à petite échelle — doit être soutenue en tant que modèle clé pour garantir la sécurité et la souveraineté alimentaires, créer des emplois décents, maintenir en vie les territoires ruraux, protéger la biodiversité et soutenir des pratiques agroécologiques adaptées au territoire. La Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP) établit un cadre clair et ambitieux qui reconnaît ces droits et exige des États qu'ils les protègent contre les pratiques abusives, qu'ils renforcent leur accès aux marchés locaux et qu'ils garantissent des moyens de subsistance dignes.

Dans ce contexte, les achats publics alimentaires ne sont pas seulement une procédure administrative, mais un outil puissant de politique publique. Ils permettent de transformer les systèmes alimentaires, de garantir une rémunération juste aux agricultrices et agriculteurs, et de réorienter les investissements publics vers des modèles plus éthiques et durables. Ces modèles placent au centre la durabilité de la production et de la distribution, la protection des droits reconnus par l'UNDROP, la santé communautaire grâce à une alimentation culturellement et nutritionnellement adaptée, et favorisent en outre les circuits courts d'approvisionnement.

De même, les achats publics alimentaires doivent être considérés comme une politique structurelle de santé publique globale. Ils conditionnent non seulement la qualité nutritionnelle des aliments, mais ont également une incidence directe sur les conditions de travail dans les campagnes, sur l'exposition aux pesticides et aux substances dangereuses, ainsi que sur la santé des communautés rurales. Orienter l'investissement public vers des modèles agroécologiques et à petite échelle constitue également une mesure préventive contre les maladies associées à la malnutrition, à la précarité de l'emploi et à l'exposition chronique aux produits chimiques agricoles. Il n'est pas cohérent de financer avec des fonds publics des aliments produits dans des conditions qui génèrent des maladies, de l'exploitation ou une dégradation de l'environnement.

Il existe **des bonnes pratiques internationales** qui démontrent que cette approche est non seulement viable, mais qu'elle génère des bénéfices tangibles.

En **Inde**, par exemple, le système de **prix minimum de soutien (MSP)** offre des prix garantis à la **petite agriculture paysanne** pour les cultures vivrières essentielles. Ces achats publics servent à approvisionner deux grands programmes de distribution alimentaire : le **Programme de repas de midi**, qui fournit des repas scolaires gratuits à plus de 100 millions d'enfants, et le **Système de distribution publique (PDS)**, qui offre des denrées alimentaires subventionnées aux ménages à faibles revenus. Ensemble, ces programmes contribuent à garantir la stabilité des marchés pour ceux qui produisent des denrées alimentaires et, dans le même temps, assurent l'accès à une alimentation nutritive pour des millions de personnes. Cette expérience est particulièrement pertinente pour l'Europe, où **de nombreuses personnes productrices à petite échelle** sont confrontées à l'exclusion des processus de passation des approvisionnements publics en raison d'une centralisation excessive des achats, de l'absence de garanties de prix et des charges administratives qui entravent leur participation.

Le **Brésil** présente un modèle plus intégré, dans lequel les achats publics s'inscrivent dans des cadres politiques nationaux en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de développement rural et d'agroécologie. Deux programmes phares illustrent cette approche : (1) Le **Programme national d'alimentation scolaire** (PNAE), qui dessert plus de 40 millions d'enfants, exige qu'au moins 30 % des denrées alimentaires scolaires soient achetées auprès de petits agriculteurs familiaux, avec des primes supplémentaires pour les produits biologiques et agroécologiques. (2) Le **Programme d'achat de denrées alimentaires** (PAA), qui permet d'acheter directement auprès des agriculteurs familiaux, y compris ceux issus de groupes marginalisés. Il propose des procédures d'appel d'offres simplifiées, un renforcement des capacités, des assurances et un soutien en matière d'infrastructures, et donne la priorité à la biodiversité, aux variétés alimentaires traditionnelles et aux méthodes agroécologiques. Au total, ces programmes injectent plus de 600 millions de dollars américains par an dans les économies alimentaires locales. Il convient de souligner que le Brésil finance également des infrastructures alimentaires publiques (telles que des cuisines communautaires et des banques alimentaires) qui s'approvisionnent en produits locaux et de saison auprès de petits agriculteurs, renforçant ainsi davantage le système alimentaire territorial.

Ces exemples mondiaux montrent que les achats publics alimentaires ne sont pas simplement un outil d'achat écologique, mais un instrument stratégique au service de la justice, de l'équité et de la résilience.

Le **Forum international sur les achats publics alimentaires** (Valence 2026) est organisé dans le but d'avancer collectivement vers cet horizon et de démontrer, à l'aide de données,

d'alliances et de propositions politiques, qu'**il est bel et bien possible** de transformer les systèmes alimentaires grâce aux achats publics.

2. Mandat et légitimité du comité organisateur

Le comité organisateur rassemble une alliance entre mouvements paysans, organisations de la société civile, acteurs institutionnels et universités :

- **COAG, Sindicato Labrego Galego, ENHE Bizkaia**, représentants de la paysannerie en Espagne.
- **Coordination Européenne Vía Campesina (ECVC) et la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC – La Vía Campesina)**, en tant que mouvement paysan international défendant la souveraineté alimentaire et la mise en œuvre de l'UNDROP.
- **CERAI, Mundubat, Justicia Alimentaria, Entretantos, Mensa Cívica** et d'autres organisations de coopération engagées en faveur de la souveraineté alimentaire.
- **Plusieurs universités (Université Polytechnique de Valence, Université de Valence, ISEC (Université de Cordoue)) et centres de recherche, tels que le Groupe sur les achats publics verts de l'Université d'Alcalá de Henares**, qui apportent des données scientifiques solides en matière d'agroécologie, de politiques publiques et de systèmes alimentaires durables.
- **Réseaux internationaux de villes (Réseau des municipalités pour l'agroécologie)**

Cette convergence apporte une légitimité politique, sociale et institutionnelle qui permet de placer les APA au cœur des agendas mondiaux en faveur de la transformation des systèmes alimentaires et de la garantie des droits.

3. Diagnostic politique du système alimentaire actuel

3.1. Concentration des entreprises et perte de contrôle public

Les grandes entreprises contrôlent des segments croissants de la production, de la transformation, de la distribution et de la restauration collective. Ce modèle :

- Limite la diversité et freine le développement d'économies équitables.
- Repose sur de multiples inégalités tant au niveau de la production que de l'accès à l'alimentation (genre, classe sociale, race...)

- Impose des prix injustes aux petits producteurs
- Affaiblit les services publics d'alimentation.
- Entrave la transition vers la durabilité et l'agroécologie
- Elle entrave la transition écologique
- Il empêche la relève générationnelle dans l'agriculture familiale et paysanne

L'externalisation généralisée des cantines scolaires, des hôpitaux et des maisons de retraite a réduit la capacité de l'État à orienter l'alimentation vers des objectifs de santé, de durabilité et d'équité.

3.2. Affaiblissement structurel de l'agriculture familiale

Dans la plupart des territoires, les exploitations familiales et paysannes souffrent :

- De prix bas, souvent inférieurs aux coûts de production, sur des marchés volatils et injustes.
- Des politiques qui favorisent l'agriculture industrielle, intégrée et à grande échelle.
- Des obstacles à l'accès à des marchés territoriaux stables.
- Des aides publiques et des politiques qui favorisent l'agriculture industrielle, intégrée et à grande échelle.
- Des conditions de concurrence inégales face aux chaînes mondiales.
- Absence d'infrastructures publiques de soutien.
- Manque de relève générationnelle.
- Précarité du travail agricole.
- Difficulté d'accès à la terre.
- Manque d'infrastructures publiques de soutien.
- Division sexuelle du travail qui sous-estime et rend invisible le travail effectué par les femmes, tant dans la production que dans les tâches de soins qui soutiennent la reproduction de la vie.

Il en résulte un déclin accéléré de l'agriculture familiale, avec d'importantes conséquences économiques, sociales et environnementales.

3.3. Non-respect des droits paysans reconnus dans l'UNDROP

Bien que l'UNDROP reconnaisse des droits essentiels (accès aux marchés locaux, à la terre, aux semences, à la participation politique), sa mise en œuvre reste faible. L'absence de mécanismes de responsabilisation et de politiques publiques concrètes empêche la réalisation effective de ces droits.

3.4. Potentiel inexploité des achats publics alimentaires

Les achats publics alimentaires pourraient mobiliser des volumes importants d'investissements publics, mais leur conception actuelle :

- Donne la priorité à des critères économiques plutôt qu'à des critères de développement territorial.
- Est conçue pour les grandes entreprises capables de satisfaire aux exigences de solvabilité requises.
- Décourage la participation des petits producteurs et l'accès de leurs produits à ce canal commercial, ce qui entrave la mise en œuvre de l'article 10 de l'UNDROP.
- Ignore les impacts sur le développement rural, la santé et les droits humains.
- Ne crée pas d'environnements favorables aux systèmes alimentaires territoriaux.
- Elle manque de perspective en matière de droits, depuis le droit à une alimentation et à une nutrition adéquates jusqu'aux droits des paysans.
- Elle privilégie une concurrence excessive fondée uniquement sur le prix.
- Il existe en outre le risque que, sans réformes structurelles, les achats publics alimentaires soient accaparés par de grands opérateurs économiques par le biais de processus d'agrégation artificielle de l'offre, de certifications privées exclusives ou de chaînes d'approvisionnement qui reproduisent la concentration du marché sous une apparence de durabilité. Sans mécanismes clairs de priorisation de l'agriculture familiale et sans limites effectives à la concentration, les achats publics risquent de devenir un nouveau créneau pour les mêmes structures corporatives qui ont contribué à affaiblir les systèmes alimentaires territoriaux.

Ce potentiel doit être libéré par des changements réglementaires, institutionnels et politiques.

4. Cadre politique et normatif à partir duquel nous partons

Le comité organisateur positionne les APA comme un outil stratégique s'inscrivant dans un cadre d'instruments internationaux qui régissent les droits et obligations établis par les documents internationaux suivants :

- Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH, 1948) : Établit dans son article 25 le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, en mettant l'accent sur l'alimentation.
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) : consacre le droit à une alimentation adéquate en obligeant les États à garantir l'accès physique et économique à des aliments culturellement appropriés, produits de manière durable.
- UNDROP (Déclaration de l'ONU sur les droits des paysans, 2018) : en particulier ses articles sur l'accès aux marchés locaux, la participation des paysans aux politiques publiques, l'utilisation durable des ressources naturelles et la protection contre les pratiques commerciales abusives.
- Recommandation générale no. 34 de la CEDAW (2016) : Publié par le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), ce document développe de manière holistique les droits des femmes rurales, reconnaissant leur rôle crucial dans la sécurité alimentaire et exigeant de sauvegarder leur droit à une alimentation et une nutrition adéquates.
- Décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale (FAO-FIDA).
- Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition du Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale (CSA).
- Directives volontaires sur la gouvernance responsable des régimes fonciers, de la pêche et des forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.
- Directives volontaires pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles.
- Agenda 2030 et ODD, avec une attention particulière pour les ODD 2, 12, 13, 15 et 17.
- Conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) : en particulier celles relatives à la liberté syndicale, aux salaires décents et aux conditions de travail équitables dans la filière agroalimentaire.
- Cadres régionaux et nationaux reconnaissant l'agriculture familiale comme un acteur stratégique.

Dans ce cadre, nous considérons que les achats publics alimentaires durables ne sont pas une option, mais une obligation découlant de l'engagement en faveur des droits humains, de la durabilité et de la justice sociale.

5. Principes politiques qui guident cette position

1. Rôle central de l'agriculture familiale, paysanne, à petite échelle et autochtone en tant que fournisseur stratégique pour les achats publics alimentaires durables.
2. Rémunération équitable pour les producteurs. Les agriculteurs ne sont pas de simples bénéficiaires de prix ; ceux-ci doivent être supérieurs aux coûts de production et fixés avec la participation des organisations paysannes.
3. Primauté des droits humains, y compris le droit à une alimentation adéquate et les droits des paysans, dans la conception des politiques alimentaires.
4. Proximité et territorialisation des systèmes alimentaires, en renforçant les circuits courts et les marchés locaux.
5. La souveraineté alimentaire comme horizon politique pour démocratiser l'alimentation.
6. L'agroécologie comme approche globale de la production, de la transformation, de la distribution et de la consommation.
7. Récupération de la gestion publique des services alimentaires, en donnant la priorité aux cuisines sur place, au personnel public et aux modèles de prestation public-communautaire.
8. Participation effective et contraignante des organisations paysannes et de la société civile à la formulation, au suivi et à l'évaluation des politiques d'APA.
9. Équité et intersectionnalité : genre, jeunesse rurale, migration, peuples autochtones.
10. Justice climatique, avec une attention particulière à la résilience des systèmes alimentaires.
11. Transparence et responsabilité, tant pour les administrations que pour les opérateurs économiques.
12. Santé globale du système alimentaire.
13. Les APA doivent protéger simultanément la santé des consommateurs, des

travailleurs agricoles et des communautés rurales. Cela implique de réduire l'exposition aux pesticides et aux substances dangereuses, de garantir des conditions de travail sûres et dignes tout au long de la chaîne agroalimentaire et de promouvoir des modèles de production qui privilégient la vie et le bien-être plutôt que la rentabilité à court terme.

6. Propositions politiques pour transformer les achats publics alimentaires

6.1. Reprendre le contrôle public de l'alimentation

- Élaborer une **réglementation et des politiques publiques** permettant de garantir le droit à une alimentation adéquate pour l'ensemble de la population, dans le cadre d'un système alimentaire favorisant la transformation agroécologique.
- Encourager la **gestion publique directe** des cantines scolaires, des hôpitaux et des maisons de retraite.
- Mettre en place **des lots différenciés de gestion et d'approvisionnement**, où la gestion (cuisine, personnel) revienne au secteur public et où l'approvisionnement puisse s'organiser autour des producteurs locaux.
- Créer **des infrastructures agroalimentaires publiques** : centres logistiques, ateliers de transformation, cuisines centrales publiques, espaces de stockage.
- Garantir les **droits des professionnelles travaillant dans les cuisines**, notamment des conditions de travail dignes, des salaires équitables, des horaires raisonnables, une formation continue et des moyens adéquats pour exercer leurs fonctions de manière sûre et efficace.

6.2. Adaptation de la réglementation pour faciliter la participation de l'agriculture familiale

- Définir légalement le statut de l'agriculture familiale et paysanne en tant que fournisseur prioritaire dans les achats publics alimentaires, afin de corriger les déséquilibres structurels du marché et de renforcer la résilience du système alimentaire. Adapter les processus de passation de marchés pour permettre l'entrée des petites exploitations : petits lots, contrats réservés, critères sociaux et environnementaux.
- Réduire les obstacles bureaucratiques et les charges administratives, en établissant des normes minimales de passation de marchés qui garantissent l'inclusion des agriculteurs de petite échelle et qui incluent des définitions claires et des seuils minimaux de participation.

- Adopter des modèles de passation d'achats dynamiques et décentralisés qui permettent une flexibilité et une capacité de réponse aux économies alimentaires locales et aux conditions environnementales.
- Élaborer des modèles de cahiers des charges techniques intégrant des critères d'agroécologie, de proximité et de saisonnalité des aliments, assortis d'une justification juridique solide.
- L'adaptation réglementaire devra intégrer des mécanismes spécifiques d'équité de genre et de relève générationnelle, y compris la possibilité d'établir des contrats réservés ou des critères de priorisation pour les exploitations dirigées par des femmes et des jeunes ruraux. De même, des indicateurs obligatoires d'impact social et de genre devront être développés dans la planification et l'évaluation des APA.

6.3. Intégration obligatoire des droits humains et du principe d'indivisibilité des droits dans l'APA

- Intégrer **des évaluations d'impact sur les droits des paysans** dans les achats publics alimentaires.
- Intégrer le droit à une alimentation et à une nutrition adéquates comme pilier.
- Intégrer l'UNDROP comme cadre d'orientation à toutes les phases de la planification, de la passation des marchés et de l'exécution.
- Veiller à ce que les critères d'attribution, les conditions particulières d'exécution et les spécifications techniques privilégient la durabilité, l'équité et la participation paysanne, les circuits courts de commercialisation, la saisonnalité, une rémunération équitable et la production agroécologique.
- Aligner les achats publics sur les principes de **la sécurité sociale alimentaire**, en reconnaissant l'alimentation comme un droit universel, en soutenant des choix alimentaires définis de manière démocratique et en finançant l'accès par des fonds publics et des cotisations sociales ; garantissant ainsi une **rémunération équitable pour les agriculteurs** et les agricultrices ainsi qu'un **accès digne à une alimentation saine et culturellement appropriée pour l'ensemble de la population.**
- Appliquer une **forte conditionnalité sociale**, en attribuant des contrats uniquement aux fournisseurs qui respectent les droits du travail et favorisent le dialogue social.
- Mettre en œuvre d'autres mécanismes courants dans les processus d'achats publics alimentaires dans différents pays qui garantissent l'application des

principes et l'intégration des droits humains, tels que la réservation de contrats pour l'agriculture à petite échelle ou la structuration des lots facilitant leur participation effective.

- Intégrer des évaluations d'impact sur la santé au travail et l'environnement dans les achats publics de restauration. Les APA doivent exclure les fournisseurs impliqués dans des violations des droits du travail, l'exploitation des travailleurs agricoles ou l'utilisation intensive de substances dangereuses présentant des risques pour la santé humaine et l'environnement. Les achats publics doivent servir de levier pour réduire l'exposition aux pesticides et garantir des conditions de travail décentes, conformément aux conventions de l'OIT et au principe de non-régression en matière de droits humains.

6.4. Territorialisation des systèmes d'approvisionnement public

- Concevoir des plans d'approvisionnement territoriaux fondés sur l'agriculture familiale.
- Promouvoir la mise en œuvre de mécanismes garantissant l'application des principes des achats publics alimentaires et l'intégration des droits humains, tels que la réservation de contrats pour l'agriculture à petite échelle ou la structuration de lots facilitant leur participation effective. Cela peut inclure la création de consortiums territoriaux reliant les administrations, les producteurs et productrices et les entités sociales, ainsi que d'autres formes de coordination qui articulent l'offre et la demande de manière participative, avec le soutien d'autres entités si nécessaire, afin d'approfondir et d'accroître l'échelle. Parmi ces mécanismes figurent notamment les plateformes collectives de commercialisation, les systèmes de planification participative des achats, les tables rondes territoriales sur les achats publics alimentaires ou les modèles de contrats flexibles.
- Investir dans des infrastructures de transport durable, de chaîne du froid, de transformation et de stockage.
- Soutenir les **systèmes alimentaires territoriaux** fondés sur **l'agroécologie, la biodiversité et les cultures alimentaires**, par le biais **de circuits courts d'approvisionnement.**

6.5. Renforcement de la gouvernance démocratique

- Créer des Conseils alimentaires publics avec une participation paysanne contraignante.
- Garantir des mécanismes de suivi et d'évaluation indépendants.

- Promouvoir la transparence et la traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
- Garantir une gouvernance à plusieurs niveaux avec la participation des organisations d'agriculteurs, des municipalités et de la société civile.

6.6. Promotion d'une alimentation saine, durable et culturellement appropriée

- Concevoir des menus intégrant des aliments de saison, des produits locaux et des recettes traditionnelles reflétant la diversité culturelle des territoires.
- Réduire la consommation de protéines animales d'origine industrielle, en favorisant les protéines végétales et les légumineuses produites localement.
- Mettre en œuvre des programmes d'éducation alimentaire dans les écoles et les centres publics qui établissent un lien entre l'alimentation, la santé, la culture et le territoire.
- Établir des normes nutritionnelles qui privilégient les aliments frais, peu transformés et exempts d'additifs inutiles.
- Les cantines scolaires et autres services publics d'alimentation doivent également être conçus comme des espaces pédagogiques et démocratiques qui relient le territoire à la salle de classe. Les achats publics alimentaires dans les établissements scolaires ne sont pas seulement un mécanisme d'approvisionnement alimentaire, mais un outil d'éducation alimentaire transformatrice qui renforce le lien entre la campagne et la ville, promeut les cultures alimentaires locales et favorise une citoyenneté critique et consciente.

6.7. Garantir une rémunération équitable aux producteurs

- Garantir **des prix équitables et des marchés stables** pour les petits et moyens agriculteurs, notamment par des mécanismes permettant aux agriculteurs de passer du statut de simples **preneurs de prix** à celui **de faiseurs de prix**.
- Développer **des mécanismes d'achats publics** qui privilégient la **stabilité des revenus** des agriculteurs grâce à des contrats à long terme, des paiements ponctuels et des systèmes de compensation reflétant le **coût réel d'une production durable**, en utilisant les achats publics comme **un outil stratégique** pour soutenir une **régulation juste et transparente du marché** par la promotion des chaînes d'approvisionnement locales et régionales, la prévention du **dumping des prix** et la dissuasion de la **concentration du marché** — favorisant ainsi **des systèmes alimentaires diversifiés et résilients**, qui autonomisent les

petits producteurs et réduisent la dépendance vis-à-vis **des marchés mondiaux volatils**.

7. Appel politique aux gouvernements et aux institutions internationales

Nous exhortons :

- **Les municipalités, les régions, les États et les autres entités du secteur public**, y compris les universités, les fondations publiques et les organismes similaires, à adopter des politiques d'achats publics alimentaires alignées sur l'agriculture familiale, l'agroécologie, le droit à l'alimentation et à une nutrition adéquate, ainsi que les principes de l'UNDROP. Ces politiques doivent promouvoir des pratiques qui facilitent la participation des producteurs et productrices de petite échelle, garantissent l'intégration des droits humains et renforcent la durabilité territoriale, sociale et environnementale.
- L'**Union européenne et d'autres organismes régionaux** à élaborer des réglementations qui reconnaissent les achats publics alimentaires comme un outil au service des droits humains.
- Les **organismes multilatéraux** à encourager la transition vers des systèmes alimentaires territorialisés.
- Les **mouvements sociaux, les organisations de coopération et les universités** à renforcer les alliances permettant de mettre ce cadre en pratique.
- Nous appelons également à **garantir la cohérence** entre les politiques d'achats publics alimentaires et les cadres commerciaux, agricoles et fiscaux. Il n'est pas possible de renforcer l'agriculture familiale par le biais des APA tout en consolidant des accords commerciaux ou des politiques agricoles qui favorisent la concentration des entreprises et la concurrence déloyale. Les achats publics alimentaires doivent s'inscrire dans une stratégie plus large de cohérence des politiques en faveur du développement durable et de la garantie effective des droits humains.

Ce moment historique exige de l'ambition. Les achats publics alimentaires constituent un outil de transformation qui doit être placé au cœur des politiques alimentaires du XXIe siècle.

8. Vers le Forum international sur les achats publics alimentaires

Cette communication constitue un document de base qui orientera le processus préparatoire du Forum international sur les achats publics alimentaires à Valence en 2026. Elle servira de cadre de référence pour les débats, les tables rondes techniques, les propositions normatives et la déclaration finale du Forum.

Notre objectif est de construire, aux côtés des gouvernements, des paysans, des institutions, du monde universitaire et de la société civile, un cadre global garantissant des systèmes alimentaires justes, durables et fondés sur les droits humains, avec l'agriculture familiale et paysanne au centre.

Le Forum sera un lieu de rencontre entre :

- **Des expériences inspirantes** en matière d'achats publics alimentaires provenant de différentes régions du monde ;
- **Des propositions normatives** concrètes adaptées à différents contextes juridiques et territoriaux.
- **Des données scientifiques** étayant la viabilité technique, économique et sociale de ce modèle.
- **Des alliances stratégiques** entre acteurs institutionnels, mouvements sociaux et universités permettant de faire progresser les transformations.

L'organisation du Forum international à Valence en 2026 est un pari visant à démontrer qu'un autre système alimentaire est possible, nécessaire et urgent. Un système qui place les personnes et la planète au centre, qui garantisse les droits et qui construise la justice alimentaire à partir des territoires.

POLICY PAPER

Public food procurement as a lever to guarantee the rights of peasants and strengthen family and peasant farming

1. Introduction

We are living in a critical moment for global food systems. The climate crisis, the accelerated loss of biodiversity and soil, trade liberalisation and speculation and deregulation of the market economy, corporate concentration in the agri-food chain and rising rural inequalities are putting the right to food and the sustainability of territories at risk. At the same time, models of collective catering and public food services have been progressively outsourced and commercialised, displacing family farming and reducing everyone's ability to access healthy, sustainable and fair food services.

In this context, it is essential to prioritise public policies that support family and peasant farming[1]. These policies recognise family farming —peasant, indigenous, and small and medium-scale— as a strategic driver of development, implementing measures to ensure its economic viability, its role in land management, and its contribution to food sovereignty. They include instruments such as access to local markets, Public Food Procurement (PFP), market regulation to ensure fair and stable prices for farmers, incentives for agroecology, improvements to rural infrastructure, and the guarantee of the rights recognised by the UNDROP (United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas). Their aim is to strengthen local production networks, democratise food production and access to food, and sustain socially and environmentally fair agricultural models.

On the other hand, trade liberalisation agreements, such as the **MERCOSUR-EU** agreement, jeopardise the ability of states to develop rights-based food policies. The massive influx of low-cost imported products, which discourages local production and creates unfair competition, can weaken peasant and family farming and hinder the implementation of public procurement based on social, sustainability or proximity

(1) In this text, we will be referring to smallholder and family farming. Our understanding of smallholder and family farming is based on the definition set out in Article 1 of the UNDROP.

criteria. In this context, strengthening Community-Based Agriculture (CBA) as a strategic tool becomes even more urgent to protect the transition towards territorial food systems from trade dynamics that exacerbate inequality and dependency and replace peasant farming models with export-oriented industrial agriculture.

Faced with all these challenges, peasant and family farming —including indigenous and small-scale farming— must be supported as a key model for ensuring food security and sovereignty, generating decent employment, keeping rural territories alive, protecting biodiversity and sustaining agroecological practices adapted to the territory. The United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP) establishes a clear and ambitious framework that recognises these rights and requires States to protect them from abusive practices, strengthen their access to local markets, and guarantee decent livelihoods.

In this context, public food procurement is not merely an administrative procedure, but a powerful public policy tool. It enables the transformation of food systems, guarantees fair compensation for farmers, and redirects public investment towards more ethical and sustainable models. These models prioritise the sustainability of production and distribution, the protection of the rights recognised by UNDROP, and community health through culturally and nutritionally appropriate food, whilst also promoting short supply chains.

Furthermore, public food procurement must be understood as a comprehensive public health structural policy. It not only determines the nutritional quality of the population but also has a direct impact on working conditions in agriculture, exposure to pesticides and hazardous substances, and the health of rural communities. Directing public investment towards agroecological and small-scale models is also a preventive measure against diseases associated with malnutrition, precarious employment and chronic exposure to agricultural chemicals. It is inconsistent to use public funds to finance food produced under conditions that cause illness, exploitation or environmental degradation.

There are **international best practices** that demonstrate that this approach is not only viable but also generates tangible benefits.

In India, for example, the **Minimum Support Price (MSP)** system offers guaranteed prices to **small-scale peasant farmers** for key food crops. These public purchases are used to supply two major food distribution programmes: the **Midday Meal Programme**, which provides free school meals to over 100 million children, and the **Public Distribution System (PDS)**, which offers subsidised food to low-income households. Together, these programmes help to ensure market stability for food producers whilst guaranteeing access to nutritious food for millions of people. This experience is particularly relevant

for Europe, where **many small-scale producers** face exclusion from public procurement processes due to excessive centralisation of purchasing, a lack of price guarantees and administrative burdens that hinder their participation.

Brazil presents a more integrated model, in which public procurement is embedded within national policy frameworks for food and nutritional security, rural development and agroecology. Two flagship programmes exemplify this approach: (1) The National School Feeding Programme (PNAE), which serves over 40 million children, requires that at least 30% of school meals be sourced from small-scale family farmers, with additional premiums for organic and agroecological products. (2) The Food Procurement Programme (PAA), which enables direct purchases from family farmers, including those from marginalised groups. It offers simplified tendering processes, capacity building, insurance and infrastructure support, and prioritises biodiversity, traditional food varieties and agroecological methods. Together, these programmes channel more than US$600 million a year into local food economies. It is worth noting that Brazil also funds public food infrastructure (such as community kitchens and food banks) that source local and seasonal products from small-scale farmers, further strengthening the local food system.

These global examples show that public food procurement (PFP) is not merely a green purchasing tool, but a strategic instrument for justice, equity and resilience.

The International Forum on Public Food Procurement (Valencia 2026) is being convened with the aim of moving collectively towards this goal and demonstrating, through evidence, partnerships and policy proposals, that **it is indeed possible** to transform food systems through public procurement.

2. Mandate and legitimacy of the Organising Committee

The organising committee brings together an alliance of peasant movements, civil society organisations, institutional actors and universities:

- **COAG, Sindicato Labrego Galego, ENHE Bizkaia**, representatives of the peasantry in Spain.
- **The European Coordination of La Via Campesina (ECVC) and the Latin American Coordination of Rural Organisations (CLOC – La Via Campesina)**, as an international peasant movement defending food sovereignty and the implementation of the UN Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP).

- **CERAI, Mundubat, Justicia Alimentaria, Entretantos, Mensa Cívica, Menjadors Ecològics, Consorcio Giasat y Amigas de la Tierra**, organisations committed to food sovereignty.
- Various **universities (Polytechnic University of Valencia, University of Valencia, ISEC (University of Córdoba)) and research centres, such as the Green Public Procurement Group at the University of Alcalá de Henares**, which provide robust scientific evidence in the fields of agroecology, public policy and sustainable food systems.
- **International networks of cities (Network of Municipalities for Agroecology)**

This convergence provides political, social and institutional legitimacy that places the PFP at the centre of global agendas for the transformation of food systems and the guarantee of rights.

3. Political assessment of the current food system

3.1. Corporate concentration and loss of public control

Large corporations control growing segments of production, processing, distribution and institutional catering. This model:

- Limits diversity and inhibits the development of fair economies.
- Is underpinned by multiple inequalities in both production and access to food (gender, class, race, etc.)
- Imposes unfair prices on small-scale producers
- Weakens public food services
- Hinders the transition towards sustainability and agroecology
- Impairs the ecological transition
- Prevents the generational renewal of family and peasant farming

The widespread outsourcing of school canteens, hospitals and care homes has reduced the state's ability to steer food provision towards objectives of health, sustainability and equity.

3.2. Structural weakening of family farming

In most regions, family and peasant farms suffer from:

- Low prices, often below production costs, in volatile and unfair markets.
- Policies that favour industrial, integrated and large-scale agriculture.
- Barriers to accessing stable local markets.
- Public payments and policies that favour industrial, integrated and large-scale agriculture.
- Unequal competitive conditions vis-à-vis global supply chains.
- Lack of public support infrastructure.
- Lack of generational succession
- Precariousness of agricultural work.
- Difficulty in accessing land
- Lack of public support infrastructure.
- Gendered division of labour in which the work carried out by women is undervalued and rendered invisible, both in productive activities and in the care tasks that sustain the reproduction of life.

The result is an accelerated decline in family farming, with significant economic, social and environmental consequences.

3.3. Failure to uphold the peasants' rights recognised in the UNDROP

Although the UNDROP recognises essential rights (access to local markets, land, seeds, political participation), its implementation remains weak. The lack of accountability mechanisms and concrete public policies prevents these rights from being realised.

3.4. Untapped potential of Public Food Procurement

Public Food Procurement could mobilise significant volumes of public investment, but its current design:

- Prioritises economic criteria over territorial development criteria.
- Is designed for large companies capable of meeting the required financial standing.
- Discourages the participation of small-scale producers and the access of their products to this commercial channel, hindering the implementation of Article 10 of the UNDROP.

- Ignores the impacts on rural development, health and human rights.
- Does not create favourable environments for territorial food systems.
- It lacks a rights-based perspective, ranging from the right to adequate food and nutrition to peasants' rights.
- It prioritises excessive competition based solely on price.
- There is also a risk that, without structural reforms, public procurement will be captured by large economic operators through processes of artificial aggregation of supply, exclusionary private certifications or supply chains that reproduce market concentration under the guise of sustainability. Without clear mechanisms to prioritise family farming and without effective limits on concentration, public procurement could become a new market niche for the very corporate structures that have contributed to the weakening of local food systems.

This potential needs to be unlocked through regulatory, institutional and political changes.

4. The political and regulatory framework from which we proceed

The organising committee positions the PFP as a strategic tool within a framework of international instruments regulating rights and obligations established by the following international documents:

- **Universal Declaration of Human Rights (UDHR, 1948)**: Establishes in Article 25 the right of everyone to a standard of living adequate for health and well-being, with special emphasis on food.
- **International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)**: Enshrines the right to adequate food, obliging States to guarantee physical and economic access to culturally appropriate food produced in a sustainable manner.
- **UNDROP (UN Declaration on the Rights of Peasants, 2018)**: Especially its articles on access to local markets, participation of peasants in public policies, sustainable use of natural resources, and protection against abusive trade practices.
- **CEDAW General Recommendation No. 34 (2016)**: Issued by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), this document

holistically develops the rights of rural women, recognizing their crucial role in food security and demanding the safeguard of their right to adequate food and nutrition.

- **United Nations Decade of Family Farming (FAO-IFAD).**
- **Voluntary Guidelines on Food Systems and Nutrition of the Committee on World Food Security.**
- **Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security.**
- **Voluntary Guidelines on Gender Equality and Women's and Girls' Empowerment.**
- **2030 Agenda and SDGs**, with special attention to SDGs 2, 12, 13, 15, and 17.
- **International Labour Organization (ILO) Conventions**: Especially on freedom of association, living wages, and fair working conditions in the agri-food chain.
- **Regional and national frameworks** that recognize family farming as a strategic actor.

Within this framework, we understand that Sustainable Public Procurement of Food is not optional, but an obligation arising from a commitment to human rights, sustainability and social justice.

5. Policy principles guiding this position

1. The central role of family, peasant, small-scale and indigenous farming as a strategic supplier for PFP.
2. Fair remuneration for producers. Farmers are not mere recipients of prices; these must be set above production costs and determined with the participation of farmers' organisations.
3. The primacy of human rights, including the right to adequate food and the rights of peasants, in the design of food policies.
4. Proximity and territorialisation of food systems, strengthening short supply chains and local markets.
5. Food sovereignty as a political goal for democratising food.
6. Agroecology as a comprehensive approach to production, processing, distribution and consumption.

7. Restoration of public management of food services, prioritising on-site kitchens, public staff and public-community provision models.
8. Effective and binding participation of farmers' organisations and civil society in the formulation, monitoring and evaluation of PFP policies.
9. Equity and intersectionality: gender, rural youth, migration, indigenous peoples.
10. Climate justice, with a particular focus on the resilience of food systems.
11. Transparency and accountability, for both public administrations and economic operators.
12. Holistic health of the food system.
13. Public Food Procurement must simultaneously protect the health of consumers, agricultural workers and rural communities. This involves reducing exposure to pesticides and hazardous substances, ensuring safe and decent working conditions throughout the agri-food chain, and promoting production models that prioritise life and well-being over short-term profitability.

6. Policy proposals to transform Public Food Procurement

6.1. Regaining public control over food

- Developing regulations and public policies that enable the realisation of the right to adequate food for the entire population within the framework of a food system that facilitates agroecological transformation.
- Promote **direct public management** of school canteens, hospitals and care homes.
- Establishing **separate management and supply streams**, where management (kitchens, staff) returns to the public sector and supply can be organised around local producers.
- Create **public agri-food infrastructure**: logistics centres, processing facilities, public central kitchens, and storage facilities.
- Guarantee the rights of professionals working in kitchens, including decent working conditions, fair wages, reasonable working hours, continuous training and adequate resources to carry out their duties safely and efficiently.

6.2. Regulatory adjustments to facilitate the participation of family farming

- Legally define the status of family and peasant farming as a priority supplier in public food procurement, with the aim of correcting structural market imbalances and strengthening the resilience of the food system. Adapt procurement processes to allow the entry of small-scale farms: small lots, reserved contracts, social and environmental criteria.
- Reduce bureaucratic barriers and administrative burdens by establishing minimum procurement standards that guarantee the inclusion of small-scale farmers, and that include clear definitions and minimum participation thresholds.
- Adopt dynamic and decentralised procurement models that allow for flexibility and responsiveness to local food economies and environmental conditions.
- Develop models for technical specifications that integrate criteria of agroecology, local sourcing and seasonality of food with a sound legal basis.
- Regulatory adjustments must incorporate specific mechanisms for gender equity and generational renewal, including the possibility of establishing reserved contracts or prioritisation criteria for farms led by women and rural youth. Furthermore, mandatory social and gender impact indicators must be developed for the planning and evaluation of the PFP.

6.3. Mandatory incorporation of human rights and the principle of the indivisibility of rights into the PFP

- Include **assessments of the impact on peasants' rights** in public food procurement contracts.
- Incorporate the right to food and adequate nutrition as a pillar
- Integrate the UNDROP as a guiding framework in all phases of planning, procurement and implementation.
- Ensure that award criteria, special implementation conditions and technical specifications prioritise sustainability, equity and peasant participation, short supply chains, seasonality, fair remuneration and agroecological production.
- Align public procurement with the principles of **Social Food Security**, recognising food as a universal right, supporting democratically defined food choices and financing access through public funds and social contributions; thereby ensuring **fair remuneration for farmers** and **dignified access to healthy and culturally appropriate food for the entire population.**
- Apply **strong social conditionality**, awarding contracts only to suppliers who respect labour rights and promote social dialogue.

- Implement other mechanisms commonly used in public food procurement processes in different countries which guarantee the application of principles and the incorporation of human rights, such as reserving contracts for small-scale agriculture or structuring lots in a way that facilitates their effective participation.
- Incorporate occupational and environmental health impact assessments into public food procurement contracts. The PFP must exclude suppliers linked to labour rights violations, the exploitation of agricultural workers or the intensive use of hazardous substances that pose risks to human and environmental health. Public procurement must act as a lever to reduce exposure to pesticides and guarantee decent working conditions, in line with ILO conventions and the principle of non-regression in human rights.

6.4. Localisation of public supply systems

- Design regional supply plans based on family farming.
- Promote the implementation of mechanisms that ensure the application of public food procurement principles and the incorporation of human rights, such as reserving contracts for small-scale agriculture or structuring tenders to facilitate their effective participation. This may include the creation of territorial consortia linking administrations, producers and social organisations, as well as other forms of coordination that bring together supply and demand in a participatory manner, with support from other entities where necessary, to deepen and scale up the initiative. These mechanisms include collective marketing platforms, participatory procurement planning systems, territorial public food procurement committees or flexible contract models, amongst others.
- Invest in sustainable transport, cold chain, processing and storage infrastructure.
- Support **regional food systems** based on **agroecology, biodiversity and food cultures, through short supply chains**.

6.5. Strengthening democratic governance

- Establish Public Food Councils with binding peasant participation.
- Ensure independent monitoring and evaluation mechanisms.
- Promote transparency and traceability throughout the supply chain.

- Ensure **multi-level governance** with the participation of **farmers' organisations, local authorities and civil society**.

6.6. Promotion of healthy, sustainable and culturally appropriate diets

- Design menus that incorporate seasonal foods, local produce and traditional recipes that reflect the cultural diversity of the regions.
- Reduce the consumption of industrially produced animal protein, promoting locally produced plant-based proteins and pulses.
- Implement food education programmes in schools and public centres that link food with health, culture and the local area.
- Establish nutritional standards that prioritise fresh, minimally processed foods free from unnecessary additives.
- School canteens and other public food services should also be conceived as educational and democratic spaces that connect the local area with the classroom. School meal schemes in educational institutions are not merely a mechanism for food provision, but a tool for transformative food education that strengthens the rural-urban link, promotes local food cultures and fosters critical and conscious citizenship.

6.7. Ensuring fair remuneration for producers

- Ensure **fair prices and stable markets** for small- and medium-scale farmers, including mechanisms that enable farmers to move from being mere price-takers to price-setters.
- Develop **public procurement mechanisms** that prioritise farmers' **income stability** through long-term contracts, timely payments and compensation schemes that reflect the **true cost of sustainable production**, using public procurement as **a strategic tool** to support **fair and transparent market regulation** by promoting local and regional supply chains, preventing **price dumping** and discouraging **market concentration** — thereby fostering **diverse and resilient food systems** that empower small-scale producers and reduce dependence on **volatile global markets.**

7. Policy call to governments and international institutions

We urge:

- **Municipalities, regions, states and other public sector entities**, including universities, public foundations and similar bodies, should adopt Public Food Procurement policies aligned with family farming, agroecology, the Right to adequate Food and nutrition, and the principles of the UNDROP. These policies must promote practices that facilitate the participation of small-scale producers, ensure the incorporation of human rights, and strengthen territorial, social and environmental sustainability.
- The **European Union** and **other regional bodies** to develop regulations that recognise Public Food Procurement as a human rights tool.
- **Multilateral organisations** to promote the transition towards territorialised food systems.
- **Social movements, cooperation organisations and universities** to strengthen alliances that enable this framework to be put into practice.
- We also urge that **coherence be ensured** between public food procurement policies and trade, agricultural and fiscal frameworks. It is not possible to strengthen family farming through PFP whilst trade agreements or agricultural policies that favour corporate concentration and unfair competition are being consolidated. PFP must be integrated into a broader strategy of policy coherence for sustainable development and the effective guarantee of human rights.

This historic moment calls for ambition. Public procurement of food is a transformative tool that must be placed at the heart of 21st-century food policies.

8. The Road to the International Forum on Public Procurement of Food

This paper serves as a **background document** to guide the preparatory process for the International Forum on Public Food Procurement in Valencia 2026. It will serve as a framework for the debates, technical roundtables, policy proposals and the Forum's final declaration.

Our aim is to build, together with governments, farmers, institutions, academia and civil society, a global framework that guarantees fair, sustainable and human rights-based food systems, with family and peasant farming at the centre.

The Forum will be a space for the convergence of:

- **Inspiring experiences** of public food procurement from different regions of the world.

- Concrete **policy proposals** adapted to different legal and territorial contexts.
- **Scientific evidence** supporting the technical, economic and social viability of this model.
- **Strategic alliances** between institutional actors, social movements and academia that enable these transformations to be scaled up.

The call for the 2026 International Forum in Valencia is a commitment to demonstrating that another food system is possible, necessary and urgent. A system that puts people and the planet at the centre, that guarantees rights and that builds food justice from the ground up.

DECLARAÇÃO POLÍTICA

A aquisição pública de alimentos como alavanca para garantir os direitos dos camponeses e fortalecer a agricultura familiar e camponesa

1. Introdução

Vivemos um momento crítico para os sistemas alimentares globais. A crise climática, a perda acelerada de biodiversidade e de solos, a liberalização comercial e a especulação e desregulamentação da economia de mercado, a concentração corporativa da cadeia agroalimentar ou o aumento das desigualdades rurais estão a pôr em risco o direito à alimentação e a sustentabilidade dos territórios. Paralelamente, os modelos de restauração coletiva e de abastecimento alimentar dos serviços públicos têm sido progressivamente externalizados e mercantilizados, deslocando a agricultura familiar e reduzindo a capacidade de todas as pessoas de aceder a serviços alimentares saudáveis, sustentáveis e justos.

Neste contexto, é fundamental dar prioridade a políticas públicas que apoiem a agricultura familiar e camponesa[1] . Estas políticas reconhecem a agricultura familiar — camponesa, indígena e de pequena e média escala — como um motor estratégico de desenvolvimento, implementando medidas para garantir a sua viabilidade económica, o seu papel na gestão do território e a sua contribuição para a soberania alimentar. Incluem instrumentos como o acesso a mercados locais, a Aquisição Pública de Alimentos (APA), a regulação dos mercados para preços justos e estáveis para os agricultores, incentivos à agroecologia, melhorias na infraestrutura rural e a garantia dos direitos reconhecidos pela UNDROP (Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Camponeses e de Outras Pessoas que Trabalham nas Zonas Rurais). O seu objetivo é fortalecer as redes locais de produção, democratizar a produção de alimentos e o acesso aos mesmos, e sustentar modelos agrícolas social e ambientalmente justos.

Por outro lado, os acordos de liberalização comercial, como o acordo **MERCOSUL-UE**, colocam em risco a capacidade dos Estados de desenvolver políticas alimentares

(1) Neste texto, referir-nos-emos à agricultura camponesa e familiar. A nossa compreensão da agricultura camponesa e familiar baseia-se na definição do artigo 1.º da UNDROP.

baseadas em direitos. A entrada maciça de produtos importados a baixo custo, que desincentiva a produção local e gera uma concorrência desleal, pode enfraquecer a agricultura camponesa e familiar e dificultar a implementação de compras públicas baseadas em critérios de sustentabilidade social e ambiental, ou de proximidade. Neste contexto, fortalecer a agricultura comunitária (CBA, na sigla em inglês) como ferramenta estratégica torna-se ainda mais urgente para proteger a transição para sistemas alimentares territoriais face a dinâmicas comerciais que exacerbam a desigualdade e a dependência e substituem os modelos de agricultura camponesa por uma agricultura industrial orientada para a exportação.

Perante todos estes desafios, a agricultura camponesa e familiar — camponesa, indígena e de pequena escala — deve ser apoiada como modelo fundamental para garantir a segurança e a soberania alimentar, gerar emprego digno, manter vivos os territórios rurais, proteger a biodiversidade e sustentar práticas agroecológicas adaptadas ao território. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Camponeses e de Outras Pessoas que Trabalham em Zonas Rurais (UNDROP) estabelece um quadro claro e ambicioso que reconhece estes direitos e exige que os Estados os protejam contra práticas abusivas, reforcem o seu acesso aos mercados locais e garantam meios de subsistência dignos.

Neste contexto, a aquisição pública de alimentos não é apenas um procedimento administrativo, mas uma ferramenta poderosa de política pública. Permite transformar os sistemas alimentares, garantir uma remuneração justa aos agricultores e redirecionar o investimento público para modelos mais éticos e sustentáveis. Estes modelos colocam no centro a sustentabilidade da produção e da distribuição, a proteção dos direitos reconhecidos pela UNDROP, a saúde comunitária através de alimentos cultural e nutricionalmente adequados, e promovem ainda as cadeias de abastecimento curtas.

Da mesma forma, a Aquisição Pública de Alimentos deve ser entendida como uma política estrutural de saúde pública integral. Não só condiciona a qualidade nutricional da população, como incide diretamente nas condições de trabalho no campo, na exposição a pesticidas e substâncias perigosas e na saúde das comunidades rurais. Orientar o investimento público para modelos agroecológicos e de pequena escala é também uma medida preventiva contra doenças associadas à desnutrição, à precariedade laboral e à exposição crônica a produtos químicos agrícolas. Não é coerente financiar com dinheiro público alimentos produzidos em condições que geram doença, exploração ou degradação ambiental.

Existem boas práticas internacionais que demonstram que esta abordagem não só é viável, como gera benefícios tangíveis.

Na Índia, por exemplo, o sistema de **Preço Mínimo de Apoio (MSP)** oferece preços garantidos à **pequena agricultura camponesa** para culturas alimentares essenciais. Estas compras públicas são utilizadas para abastecer dois grandes programas de distribuição alimentar: o **Programa de Refeições do Meio-dia**, que fornece refeições escolares gratuitas a mais de 100 milhões de crianças, e o **Sistema de Distribuição Pública (PDS)**, que oferece alimentos subsidiados a famílias de baixos rendimentos. Em conjunto, estes programas contribuem para garantir a estabilidade dos mercados para quem produz alimentos e, ao mesmo tempo, asseguram o acesso a alimentos nutritivos para milhões de pessoas. Esta experiência é especialmente relevante para a Europa, onde **muitos pequenos produtores** enfrentam a exclusão dos processos de contratação pública devido à centralização excessiva das compras, à falta de garantias de preços e aos encargos administrativos que dificultam a sua participação.

O **Brasil** apresenta um modelo mais integrado, no qual a contratação pública está incorporada em quadros de políticas nacionais para a segurança alimentar e nutricional, o desenvolvimento rural e a agroecologia. Dois programas emblemáticos ilustram esta abordagem: (1) O **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**, que atende a mais de 40 milhões de crianças, exige que pelo menos 30 % dos alimentos escolares sejam adquiridos a pequenos agricultores familiares, com prémios adicionais para produtos biológicos e agroecológicos. (2) O **Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)**, que permite a compra diretamente a agricultores familiares, incluindo os de grupos marginalizados. Oferece processos de concurso simplificados, reforço de capacidades, seguros e apoio em infraestruturas, e dá prioridade à biodiversidade, às variedades alimentares tradicionais e aos métodos agroecológicos. Em conjunto, estes programas canalizam mais de 600 milhões de dólares americanos por ano para as economias alimentares locais. É de salientar que o Brasil também financia infraestruturas alimentares públicas (como cozinhas comunitárias e bancos alimentares) que se abastecem de produtos locais e sazonais provenientes de pequenos agricultores, reforçando ainda mais o sistema alimentar territorial.

Estes exemplos globais mostram que a contratação pública de alimentos não é simplesmente uma ferramenta de compra ecológica, mas um instrumento estratégico para a justiça, a equidade e a resiliência.

O **Fórum Internacional de Compras Públicas de Alimentos** (Valência 2026) é convocado com o objetivo de avançar coletivamente rumo a este horizonte e demonstrar, com evidências, alianças e propostas políticas, que **é sim possível** transformar os sistemas alimentares a partir das compras públicas.

2. Mandato e legitimidade do Comité Organizador

El comité organizador reúne una alianza entre movimientos campesinos, organizaciones de la sociedad civil, actores institucionales y universidades:

- **COAG, Sindicato Labrego Galego, ENHE Bizkaia**, representantes do campesinato no Estado espanhol.
- **Coordenadora Europeia Vía Campesina (ECVC) e a Coordenadora Latino-Americana de Organizações do Campo (CLOC – La Vía Campesina)**, como movimento camponês internacional que defende a soberania alimentar e a implementação da UNDROP.
- **CERAI, Mundubat, Justiça Alimentar, Entretantos, Mensa Cívica** e outras organizações de cooperação comprometidas com a soberania alimentar.
- Várias **universidades (Universidade Politécnica de Valência, Universidade de Valência, ISEC (Universidade de Córdoba)) e centros de investigação, como o Grupo de Compras Públicas Verdes da Universidade de Alcalá de Henares**, que fornecem evidências científicas sólidas em agroecologia, políticas públicas e sistemas alimentares sustentáveis.
- **Redes internacionais de cidades (Rede de Municípios pela Agroecologia)**

Esta convergência confere uma legitimidade política, social e institucional que permite situar a CPA no centro das agendas globais para a transformação dos sistemas alimentares e a garantia dos direitos.

3. Diagnóstico político do atual sistema alimentar

3.1. Concentração empresarial e perda de controlo público

As grandes corporações controlam segmentos crescentes da produção, do processamento, da distribuição e da restauração institucional. Este modelo:

- Limita a diversidade e inibe o desenvolvimento de economias justas.
- Baseia-se em múltiplas desigualdades, tanto na produção como no acesso aos alimentos (gênero, classe, raça...).
- Impõe preços injustos às pequenas produções.
- Enfraquece os serviços públicos de alimentação.

- Obstrui a transição para a sustentabilidade e a agroecologia.
- Dificulta a transição ecológica.
- Impede a renovação geracional da agricultura familiar e camponesa.

A externalização generalizada das cozinhas escolares, de hospitais e lares reduziu a capacidade do Estado de orientar a alimentação para objetivos de saúde, sustentabilidade e equidade.

3.2. Enfraquecimento estrutural da agricultura familiar

Na maioria dos territórios, as explorações familiares e camponesas sofrem:

- Preços baixos, muitas vezes abaixo dos custos de produção, em mercados voláteis e injustos.
- Políticas que favorecem a agricultura industrial, integrada e de grande escala.
- Barreiras ao acesso a mercados territoriais estáveis.
- Subsídios públicos e políticas que favorecem a agricultura industrial, integrada e em grande escala.
- Condições de concorrência desiguais face às cadeias globais.
- Ausência de infraestruturas públicas de apoio.
- Falta de renovação geracional.
- Precariedade do trabalho agrícola.
- Dificuldade de acesso à terra.
- Falta de infraestruturas públicas de apoio.
- Divisão sexual do trabalho, em que o trabalho realizado pelas mulheres é subvalorizado e invisibilizado, tanto nas atividades produtivas como nas tarefas de cuidados que sustentam a reprodução da vida.

O resultado é um declínio acelerado da agricultura familiar, com importantes consequências econômicas, sociais e ambientais.

3.3. Incumplimiento de los derechos campesinos reconocidos en la UNDROP

Embora a UNDROP reconheça direitos essenciais (acesso a mercados locais, terra, sementes, participação política), a sua implementação continua a ser fraca. A falta de

mecanismos de prestação de contas e de políticas públicas concretas impede que estes direitos se tornem efetivos.

3.4. Potencial não aproveitado da Aquisição Pública de Alimentos

A CPA poderia mobilizar volumes significativos de investimento público, mas a sua conceção atual:

- Dá prioridade a critérios económicos em detrimento de critérios de desenvolvimento territorial.
- Está concebida para grandes empresas capazes de assumir as garantias exigidas.
- Desincentiva a participação de pequenos produtores e o acesso dos seus produtos a este canal comercial, dificultando a implementação do Art. 10.º da UNDROP.
- Ignora os impactos no desenvolvimento rural, na saúde e nos direitos humanos.
- Não cria ambientes favoráveis aos sistemas alimentares territoriais.
- Carece de uma perspetiva de direitos, desde o direito à alimentação e nutrição adequadas até aos direitos dos camponeses.
- Prioriza uma concorrência excessiva baseada exclusivamente no preço.
- Existe ainda o risco de que, sem reformas estruturais, a CPA seja capturada por grandes operadores económicos através de processos de agregação artificial da oferta, certificações privadas excludentes ou cadeias de abastecimento que reproduzem a concentração do mercado sob uma aparência de sustentabilidade. Sem mecanismos claros de priorização da agricultura familiar e sem limites efetivos à concentração, a compra pública pode tornar-se um novo nicho de mercado para as mesmas estruturas corporativas que contribuíram para enfraquecer os sistemas alimentares territoriais.

Este potencial precisa ser desbloqueado através de mudanças regulamentares, institucionais e políticas.

4. Quadro político e normativo a partir do qual partimos

O comité organizador posiciona a CPA como uma ferramenta estratégica no âmbito de

um conjunto de instrumentos internacionais que regulam direitos e obrigações estabelecidos pelos seguintes documentos internacionais:

- **Declaração Universal dos Direitos Humanos** (DUDH, 1948): O Artigo 25 estabelece o direito de todos a um padrão de vida adequado à sua saúde e bem-estar, com ênfase especial na alimentação.
- **Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais** (PIDESC): Consagra o direito à alimentação adequada, obrigando os Estados a garantir o acesso físico e econômico a alimentos culturalmente apropriados e produzidos de forma sustentável.
- **Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Camponeses** (UNDROP, 2018): Em particular, seus artigos sobre acesso a mercados locais, participação dos camponeses em políticas públicas, uso sustentável dos recursos naturais e proteção contra práticas comerciais abusivas.
- **Recomendação Geral nº 34 da CEDAW** (2016): Emitida pelo Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher (CEDAW), este documento desenvolve de forma holística os direitos das mulheres rurais, reconhecendo seu papel crucial na segurança alimentar e exigindo a salvaguarda de seu direito à alimentação e nutrição adequadas.
- **Década das Nações Unidas da Agricultura Familiar** (FAO-FIDA).
- **Diretrizes Voluntárias sobre Sistemas Alimentares e Nutrição do Comitê de Segurança Alimentar Mundial.**
- **Diretrizes Voluntárias sobre Governança Responsável da Posse da Terra, da Pesca e das Florestas no Contexto da Segurança Alimentar Nacional.**
- **Diretrizes Voluntárias sobre Igualdade de Gênero e Empoderamento de Mulheres e Meninas.**
- A **Agenda 2030** e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com atenção especial aos ODS 2, 12, 13, 15 e 17.
- **Convenções da Organização Internacional do Trabalho** (OIT): especialmente aquelas referentes à liberdade sindical, salários dignos e condições de trabalho justas na cadeia agroalimentar.
- **Quadros regionais e nacionais que reconhecem a agricultura familiar como um ator estratégico.**

A partir deste quadro, entendemos que a Contratação Pública Alimentar Sustentável não é opcional, mas sim uma obrigação decorrente do compromisso com os direitos humanos, a sustentabilidade e a justiça social.

5. Princípios políticos que orientam esta posição

1. Centralidade da agricultura familiar, camponesa, de pequena escala e indígena como fornecedor estratégico para a CPA.
2. Remuneração justa para os produtores. Os agricultores não são meros destinatários de preços; estes devem situar-se acima dos custos de produção e ser fixados com a participação de organizações camponesas.
3. Primazia dos direitos humanos, incluindo o direito à alimentação adequada e os direitos dos camponeses, na conceção das políticas alimentares.
4. Proximidade e territorialização dos sistemas alimentares, fortalecendo os circuitos curtos e os mercados locais.
5. Soberania alimentar como horizonte político para democratizar a alimentação.
6. Agroecologia como abordagem integral na produção, transformação, distribuição e consumo.
7. Recuperação da gestão pública dos serviços alimentares, dando prioridade às cozinhas in situ, ao pessoal público e aos modelos de prestação público-comunitários.
8. Participação efetiva e vinculativa das organizações camponesas e da sociedade civil na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de CPA.
9. Equidade e interseccionalidade: gênero, juventude rural, migração, povos indígenas.
10. Justiça climática, com especial atenção à resiliência dos sistemas alimentares.
11. Transparência e prestação de contas, tanto para as administrações como para os operadores económicos.
12. Saúde integral do sistema alimentar.
13. A CPA deve proteger simultaneamente a saúde da população consumidora, dos trabalhadores agrícolas e das comunidades rurais. Isto implica reduzir a exposição a pesticidas e substâncias perigosas, garantir condições de trabalho

seguras e dignas em toda a cadeia agroalimentar e promover modelos produtivos que priorizem a vida e o bem-estar acima da rentabilidade a curto prazo.

6. Propostas políticas para transformar a Aquisição Pública de Alimentos

6.1. Recuperar o controlo público da alimentação

- Desenvolvimento de **regulamentação e políticas públicas** que permitam o exercício do direito à alimentação adequada para toda a população, no âmbito de um sistema alimentar que possibilite a transformação agroecológica.
- Promover a **gestão pública direta** de cantinas escolares, hospitais e lares.
- Estabelecer **lotes diferenciados de gestão e abastecimento**, em que a gestão (cozinha, pessoal) regresse ao domínio público e o abastecimento possa ser organizado em torno de produtores locais.
- Criar **infraestruturas agroalimentares públicas**: centros logísticos, oficinas, cozinhas centrais públicas, espaços de armazenamento.
- Garantir os **direitos das profissionais** que trabalham nas cozinhas, incluindo condições de trabalho dignas, salários justos, horários razoáveis, formação contínua e meios adequados para desempenhar as suas funções de forma segura e eficiente.

6.2. Adaptação normativa para facilitar a participação da agricultura familiar

- Definir legalmente o estatuto da agricultura familiar e camponesa como fornecedor prioritário na contratação pública alimentar, com o objetivo de corrigir os desequilíbrios estruturais do mercado e fortalecer a resiliência do sistema alimentar. Adaptar os processos de contratação para permitir a entrada de pequenas explorações: lotes pequenos, contratos reservados, critérios sociais e ambientais.
- Reduzir as barreiras burocráticas e os encargos administrativos, estabelecendo padrões mínimos de contratação que garantam a inclusão de pequenos agricultores e que incluam definições claras e limiares mínimos de participação.
- Adotar modelos de contratação dinâmicos e descentralizados que permitam flexibilidade e capacidade de resposta às economias alimentares locais e às condições ambientais.

- Desenvolver modelos de cadernos de encargos que integrem critérios de agroecologia, proximidade e sazonalidade dos alimentos com uma sólida justificação jurídica.
- A adequação normativa deverá incorporar mecanismos específicos de equidade de género e relevo geracional, incluindo a possibilidade de estabelecer contratos reservados ou critérios de priorização para explorações lideradas por mulheres e jovens rurais. Além disso, deverão ser desenvolvidos indicadores obrigatórios de impacto social e de género no planeamento e avaliação da CPA..

6.3. Incorporação obrigatória dos direitos humanos e do princípio da indivisibilidade dos direitos na CPA

- Incluir avaliações de impacto nos direitos dos camponeses nos contratos públicos de alimentação.
- Incorporar o direito à alimentação e à nutrição adequada como pilar.
- Integrar a UNDROP como quadro orientador em todas as fases de planejamento, contratação e execução.
- Garantir que os critérios de adjudicação, as condições especiais de execução e as especificações técnicas priorizem a sustentabilidade, a equidade e a participação camponesa, os circuitos curtos de comercialização, a sazonalidade, a remuneração justa e a produção agroecológica.
- Alinhar a contratação pública com os princípios da **Segurança Social Alimentar**, reconhecendo a alimentação como um direito universal, apoiando escolhas alimentares definidas de forma democrática e financiando o acesso através de fundos públicos e contribuições sociais; garantindo assim uma **remuneração justa para os agricultores** e um **acesso digno a alimentos saudáveis e culturalmente adequados para toda a população**.
- Aplicar uma forte condicionalidade social, adjudicando contratos apenas a fornecedores que respeitem os direitos laborais e promovam o diálogo social.
- Implementar outros mecanismos habituais nos processos de aquisição pública de alimentos em diferentes países que garantam a aplicação dos princípios e a integração dos direitos humanos, tais como a reserva de contratos para a agricultura de pequena escala ou a estruturação de lotes que facilite a sua participação efetiva.
- Incorporar avaliações de impacto na saúde ocupacional e ambiental nos contratos públicos de alimentação. A CPA deve excluir fornecedores associados

a violações dos direitos laborais, à exploração de trabalhadores agrícolas ou ao uso intensivo de substâncias perigosas que gerem riscos para a saúde humana e ambiental. A contratação pública deve funcionar como alavanca para reduzir a exposição a pesticidas e garantir condições de trabalho dignas, em conformidade com as convenções da OIT e com o princípio da não regressão em matéria de direitos humanos.

6.4. Territorialização dos sistemas de abastecimento público

- Conceber planos territoriais de abastecimento baseados na agricultura familiar.
- Promover a implementação de mecanismos que garantam a aplicação dos princípios da compra pública de alimentos e a integração dos direitos humanos, como a reserva de contratos para a agricultura de pequena escala ou a estruturação de lotes que facilite a sua participação efetiva. Isto pode incluir a criação de consórcios territoriais que liguem administrações, produtores e produtoras e entidades sociais, bem como outras formas de coordenação que articulem a oferta e a procura de forma participativa, com o apoio de outras entidades quando necessário, para aprofundar e aumentar a escala. Entre estes mecanismos encontram-se plataformas coletivas de comercialização, sistemas de planeamento de compras participativas, mesas territoriais de compras públicas de alimentos ou modelos de contrato flexíveis, entre outros.
- Investir em infraestruturas de transporte sustentável, refrigeração, transformação e armazenamento.
- Apoiar **sistemas alimentares territoriais** baseados na **agroecologia, na biodiversidade e nas culturas alimentares**, através de **cadeias de abastecimento curtas**.

6.5. Reforço da governação democrática

- Criar Conselhos Alimentares Públicos com participação vinculativa dos agricultores.
- Garantir mecanismos independentes de acompanhamento e avaliação.
- Promover a transparência e a rastreabilidade em toda a cadeia de abastecimento.
- Garantir uma **governação multinível** com a participação de **organizações de agricultores, municípios e sociedade civil**.

6.6. Promoción de dietas saludables, sostenibles y culturalmente apropiadas

- Diseñar menús que incorporen alimentos de temporada, productos locales y recetas tradicionales que reflejen la diversidad cultural de los territorios.
- Reducir el consumo de proteína animal de origen industrial, promoviendo proteínas vegetales y legumbres producidas localmente.
- Implementar programas de educación alimentaria en escuelas y centros públicos que conecten la alimentación con la salud, la cultura y el territorio.
- Establecer estándares nutricionales que prioricen alimentos frescos, mínimamente procesados y libres de aditivos innecesarios.
- Los comedores escolares y otros servicios públicos de alimentación deben concebirse también como espacios pedagógicos y democráticos que conecten el territorio con el aula. La CPA en centros educativos no es únicamente un mecanismo de provisión alimentaria, sino una herramienta de educación alimentaria transformadora que fortalece el vínculo campo-ciudad, promueve culturas alimentarias locales y fomenta una ciudadanía crítica y consciente.

6.7. Garantir uma remuneração justa aos produtores

- Garantir **preços justos e mercados estáveis** para os pequenos e médios agricultores, incluindo mecanismos que permitam aos agricultores passar de meros **tomadores de preços** a **definidores de preços**.
- Desenvolver **mecanismos de compras públicas** que priorizem a **estabilidade dos rendimentos** dos agricultores através de contratos de longo prazo, pagamentos pontuais e esquemas de compensação que reflitam o **verdadeiro custo de uma produção sustentável**, utilizando as compras públicas como **ferramenta estratégica** para apoiar a **regulação justa e transparente do mercado** através da promoção de cadeias de abastecimento locais e regionais, da prevenção do **dumping de preços** e do desincentivo à **concentração do mercado** — promovendo assim **sistemas alimentares diversificados e resilientes**, que capacitem os pequenos produtores e reduzam a dependência de **mercados globais voláteis**.

7. Apelo político aos governos e às instituições internacionais

Exhortamos:

- **Municípios, regiões, Estados e outras entidades do setor público**, incluindo universidades, fundações públicas e organismos semelhantes, a adotarem políticas de Contratação Pública Alimentar alinhadas com a agricultura familiar, a agroecologia, o Direito à alimentação e nutrição adequada e os princípios da

UNDROP. Estas políticas devem promover práticas que facilitem a participação de produtoras e produtores de pequena escala, garantam a integração dos direitos humanos e reforcem a sustentabilidade territorial, social e ambiental.

- A **União Europeia e outros organismos regionais** devem desenvolver regulamentos que reconheçam a CPA como um instrumento de direitos humanos.
- Que os **organismos multilaterais** impulsionem a transição para sistemas alimentares territorializados.
- Os **movimentos sociais, as organizações de cooperação e as universidades** a reforçarem as alianças que permitam pôr este quadro em prática.
- Exhortamos igualmente a **garantir a coerência** entre as políticas de compras públicas de alimentos e os quadros comerciais, agrícolas e fiscais. Não é possível fortalecer a agricultura familiar através da CPA enquanto se consolidam acordos comerciais ou políticas agrícolas que favorecem a concentração empresarial e a concorrência desleal. A CPA deve integrar-se numa estratégia mais ampla de coerência de políticas para o desenvolvimento sustentável e a garantia efetiva dos direitos humanos.

Este momento histórico exige ambição. A aquisição pública de alimentos é uma ferramenta transformadora que deve ocupar um lugar central nas políticas alimentares do século XXI.

8. Rumo ao Fórum Internacional de Compras Públicas de Alimentos

Esta comunicação constitui um documento de base que orientará o processo preparatório do Fórum Internacional de CPA em Valência 2026. Servirá como quadro de referência para os debates, as mesas técnicas, as propostas normativas e a declaração final do Fórum.

O nosso objetivo é construir, em conjunto com governos, agricultores, instituições, o meio académico e a sociedade civil, um quadro global que garanta sistemas alimentares justos, sustentáveis e baseados nos direitos humanos, com a agricultura familiar e camponesa no centro.

O Fórum será um espaço de confluência entre:

- **Experiências inspiradoras** de compras públicas de alimentos provenientes de diferentes regiões do mundo.
- **Propostas normativas** concretas adaptadas a diferentes contextos legais e territoriais.

- **Evidência científica** que sustente a viabilidade técnica, econômica e social deste modelo.
- **Alianças estratégicas** entre atores institucionais, movimentos sociais e o meio académico que permitam ampliar as transformações.

A convocação do Fórum Internacional em Valência 2026 é uma aposta para demonstrar que outro sistema alimentar é possível, necessário e urgente. Um sistema que coloque as pessoas e o planeta no centro, que garanta direitos e que construa justiça alimentar a partir dos territórios.

Comité organizador
Comité d'organisation
Organising Committee

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

EUROPEAN COORDINATION VIA CAMPESINA

sindicato labrego galego comisións labregas

COAG

BIZKAIA ehne euskal herriko nekazarien elkartasuna

JUSTICIA ALIMENTARIA

GIASAT

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

fundación entretantos

isec Instituto de Sociología y Estudios Campesinos

MENJADORS ECOLÒGICS

Amigas de la Tierra

Alianza Europea para una restauración colectiva sostenible MENSA CIVICA

RED DE MUNICIPIOS POR LA AGROECOLOGÍA

CLOC

CLOC - LA VÍA CAMPESINA
COORDINADORA LATINOAMERICANA DE ORGANIZACIONES DEL CAMPO

LA VÍA CAMPESINA

FORO INTERNACIONAL
COMPRA PÚBLICA
ALIMENTARIA

forocomprapublica.org